

**Exención del deber de informar cuando el tratamiento o la cesión están expresamente previstos en una Ley. Legislación de extranjería. Informe 60/2004.**

La consulta plantea si, tras la introducción de la nueva Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es necesario informar a los afectados del acceso realizado en relación con sus datos de inscripción padronal por la Dirección General de la Policía, así como de los posibles destinatarios de la información, de acuerdo con lo previsto por el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Según dispone la mencionada Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/1985 "Para la exclusiva finalidad del ejercicio de las competencias establecidas en la Ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sobre control y permanencia de extranjeros en España, la Dirección General de la Policía accederá a los datos de inscripción padronal de los extranjeros existentes en los Padrones Municipales, preferentemente por vía telemática".

El artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 viene a establecer un deber impuesto en general a los responsables de los tratamientos, de tal suerte que, en principio, será necesario informar al afectado del tratamiento de sus datos de carácter personal, tanto en los supuestos en que el mismo cuenta con el consentimiento del mismo como en los casos en que el tratamiento se encuentra habilitado por otras causas admitidas por el artículo 6 de la propia Ley.

Según lo dispuesto en el propio artículo 5, el cumplimiento de dicho deber debería ser inmediato en caso de que los datos fueran recogidos de los afectados o verificarse en el plazo de tres meses desde la recogida, si el origen de los datos no fuera el propio afectado.

No obstante, esta regla admite determinadas excepciones o matizaciones para supuestos excepcionales. Así, en caso de que los datos no sean recogidos directamente de los afectados, el artículo 5.5 establece en su párrafo primero que "No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando expresamente una Ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias".

El precepto transcrito tiene su origen en lo establecido en el artículo 11.2 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, de la que la Ley Orgánica 15/1999 es transposición al Ordenamiento español. Según dicho precepto "Las disposiciones del apartado 1 (referido al deber de información en caso de recogida de los datos de fuentes distintas al propio afectado) no se aplicarán, en particular para el tratamiento con fines estadísticos o de investigación histórica o científica, cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados o el registro o la comunicación a un tercero estén expresamente prescritos por ley. En tales casos, los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas".

De este modo, una interpretación coherente del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, a la vista de lo establecido en la Directiva 95/46/CE de que trae causa, implica que el deber de información al afectado quedará exceptuado en los supuestos en que el tratamiento o cesión de datos venga expresamente regulado en una norma con rango de Ley.

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa la cesión que implica el acceso a los datos del Padrón Municipal de Habitantes por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se recoge expresamente en la ya reproducida Disposición adicional séptima de la Ley 7/1985, en la redacción dada a la misma por la Ley Orgánica 14/2003, que a su vez establece garantías especiales en cuanto a las medidas de seguridad que habrán de adoptarse en relación con dicho acceso, en particular mediante el establecimiento de un control de accesos, del que deberá quedar constancia en la Dirección General de la Policía.

Por este motivo, dado que la cesión se prevé expresamente en una norma con rango de Ley, deberá considerarse de aplicación al presente supuesto lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, quedando así el supuesto excluido del cumplimiento del deber de información.

En todo caso, es preciso aclarar que la aplicación de la excepción del artículo 5.5 a la que venimos refiriéndonos en este caso será aplicable a supuestos como el aquí analizado, en que el tratamiento o cesión de los datos de carácter personal aparece recogido expresamente en una norma con rango de Ley, pero no a aquellos supuesto en que la Ley "autorice" o "habilite" la cesión de los datos, pero no la recoja de modo expreso y taxativo en su articulado, sin perjuicio de que en dichos supuestos la cesión se encontrará amparada por lo dispuesto en los artículos 6.2 u 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

En el sentido que se ha descrito se ha pronunciado ya la Agencia Española de Protección de Datos en resolución de 8 de octubre de 2004, en la que se señala:

"El artículo 5.5 también exceptúa de la obligación de informar cuando expresamente una Ley lo prevea. De la interpretación literal del artículo resultaría que la obligación de informar debe estar expresamente exceptuada en una Ley para que se cumplan las condiciones previstas en este supuesto. Sin embargo la Directiva 95/46/CE, que ha sido traspuesta por la Ley 15/1999, en su artículo 11.2 especifica que no existe deber de informar en particular para el tratamiento con fines estadísticos o de investigación histórica o científica, cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados o el registro o la comunicación a un tercero estén expresamente prescritos por ley, por lo que ha de interpretarse este supuesto de exclusión en los términos previstos en la Directiva, quedando excluida la obligación de informar cuando la cesión de datos esté expresamente prevista en una Ley"

En consecuencia, en el presente supuesto en que la Ley prevé expresamente la cesión de los datos del Padrón Municipal de Habitantes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no limitándose a establecer un criterio que autorice dicha cesión, sino haciendo referencia expresa a la cesión misma, deberá considerarse que, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, interpretado congruentemente con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Directiva 95/46/CE, no será preciso informar a los afectados del acceso concreto a sus datos derivado de la aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional séptima de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.